

REBELDES ‘PRIMITIVOS’ E ‘INSTITUCIONALIZADOS’: URUGUAYOS Y ARGENTINOS EN CONFLICTO.

Andrés Rivarola Puntigliano

I. INTRODUCCIÓN

La tesis central de este artículo es que una dificultad para encontrar solución al conflicto entre Argentina y Uruguay, alrededor de la instalación de fábricas de celulosa a orillas del Río Uruguay, se debe a un ‘vacío de poder’. Esto se expresa por la inexistencia de actores legítimos definiendo un ‘bien común’, tanto a nivel nacional, como regional. Por cierto que no es la primera vez que se dan este tipo de enfrentamientos, ni son un patrimonio del Cono Sur, o América Latina en general. Sin embargo, tanto la forma que ha tomado este conflicto (internacional), como algunos de los actores involucrados (movimientos sociales), dan lugar a reflexiones y preguntas en torno a un nuevo tipo de contexto, que requiere un formato distinto de soluciones. Consideramos que un paso en este sentido es el reconocer que estamos ante una nueva realidad en lo que respecta a formas de articulación de la sociedad civil, en formas de interacción entre estado y ciudadano, así como entre naciones y estados. Esto implica el reconocimiento de que los estados-nacionales cada vez tienen más dificultades de, por si solos, resolver las demandas de sus ciudadanos. También implica el buscar soluciones estructurales, que vayan más allá de ‘lo nacional’, buscando nuevas formas de ‘ciudadanía’. Nuestras reflexiones sobre esto se harán a partir de un estudio de los cambios en la interacción entre movimientos sociales y partidos políticos en Uruguay.

II. ALGUNOS APUNTES TEÓRICOS

En una publicación anterior a este conflicto, Hochstetler (2003:215) proféticamente señalaba que para los países del MERCOSUR, el problema transfronterizo más obvio es la cantidad de ríos compartidos por los países de la región. Una conclusión relevante de su trabajo, fue constatar lo poco que se sabe sobre el impacto que el MERCOSUR ha tenido y tendrá a nivel de la sociedad civil, haciendo la pregunta clave de: ¿qué significa la

ciudadanía en el contexto regional? (2003:204). En esta línea, Jelin (2003:55) argumenta que “los procesos de integración regional plantean la necesidad de repensar la relación entre ciudadanía y nacionalidad/nacionalismo”. Esto, según ella, significa la creación de esferas públicas supranacionales lo que requiere el desarrollo de nuevas formas de ciudadanía. Esto implicaría “el desarrollo de nuevas voces, actores y movimientos sociales”. Si bien hay, como explica Jelin, oportunidades para expresar un alto grado de creatividad cultural, anclada en nuevas identidades colectivas o compromisos cívicos con valores alternativos, estas se ven potenciadas o bloqueadas según la manera en que se desarrollen los nuevos marcos interpretativos de la acción colectiva. De esta manera, en el nuevo contexto creado por los proyectos de integración regional, los movimientos sociales tendrían “la oportunidad de reforzar o de ampliar su doble rol, como sistemas colectivos de reconocimiento social que expresan identidades colectivas, y como intermediarios políticos no partidarios que traen las necesidades y demandas de las voces no articuladas a la esfera pública”. No hay duda que la sociedad civil, y en ella los movimientos sociales, está desarrollando un nuevo papel. Sin embargo, como dice Cardoso (2006:508) la afirmación de que la sociedad civil es hoy más activa que en el pasado, modifica, pero no necesariamente reduce la acción del Estado, ni de los partidos políticos. Justamente, en el conflicto entre Argentina y Uruguay, se ve como la sociedad civil, a través de distintos tipos de movimientos sociales, se expresa, toma iniciativa y, hasta cierto punto, dirige la agenda por encima de partidos políticos y estados. Si bien esto puede ser parte de la democracia ‘desde abajo’ que algunos reclaman, genera también dilemas en torno a cuál es el nivel óptimo para dirimir conflictos. O, en otras palabras; ¿quién tiene la ‘última palabra’, para definir lo que es mejor para el ‘bien común’? ¿Cuál es la instancia con legitimidad formal (reglas jurídicas) e informal (genera consenso en base a su autoridad moral) que tiene la autoridad para intervenir?

Desde nuestra perspectiva, uno de los problemas que se han hecho visibles a través de la crisis entre estos dos países está relacionado con la irrupción de actores que debilitan la acción del Estado nacional y la dificultad para encontrar agentes ‘mediadores’ legítimos. Es en este sentido que nos resulta particularmente interesante el papel que la teoría le ha asignado a los ‘movimientos sociales’ y su relación con el estado. Como explica Lembke (2007:56), estos son vistos como agentes para “retomar la sociedad del estado”, a modo de evitar los males del clientelismo, la corrupción y la co-optación por élites blancas y pro-capitalistas. Pero el distanciamiento, no solo se relaciona al estado sino también a organizaciones ligadas a este (partidos políticos), lo que aseguraría una verdadera

representación 'desde abajo'. Esta perspectiva ha sido objetada por la idealización y simplismo con que son analizados los 'movimientos sociales'. Tanto en lo referente a la pérdida de vista del 'déficit democrático' que estos conllevan, así como en la falta de comprensión a los cambios que efectivamente se han producido en la esfera del estado y de los partidos políticos. Retomando el punto de Cardoso mencionado anteriormente, es interesante la posición de Foweraker (1995) quién mantiene que los 'movimientos sociales' están obligados a interactuar con agencias estatales, partidos políticos y grupos de la sociedad civil (por ejemplo sindicatos) a modo de lograr impacto de sus plataformas reivindicativas. Desde su noción del terreno 'legal-institucional', Foweraker rechaza el espacio público intermedio de legalidad al cual los movimientos, muchas veces, son llevados.

Nuestro punto de partida es que más allá de que el Estado haya relegado muchas de sus responsabilidades al sector privado u organizaciones no-gubernamentales (ONGs), sigue siendo un agente clave de todo proceso de desarrollo en términos de organización de recursos, dirimir conflictos o dar legitimidad a acciones y actores. Por otro lado, consideramos que hay que reconsiderar el 'nivel' en el cual este se debe situar para ser más eficiente. Volvemos aquí a la necesidad de reestructurar el estado hacia una dimensión supranacional lo cual requiere el desarrollo de nuevas formas de ciudadanía; de ahí la relevancia en la pregunta de Hochstetler. Pero la búsqueda de lo supranacional no puede perder de vista que las matrices nacionales de Estado-sociedad y sus lazos al mundo que difieren en distintos 'ambientes institucionales'.

No hay duda que esto es así en el caso de Uruguay y Argentina. Para este estudio tomaremos como eje central la evolución en la 'matriz' uruguaya, a partir de la cual haremos referencias a las similitudes y diferencias que vemos con el caso Argentino. A modo de caracterizar los distintos tipos de movimientos sociales, partiremos de un concepto de Hobsbawm (1965), quién habla de 'rebeldes primitivos'. Esto no es usado en sentido peyorativo, sino más bien para caracterizar a expresiones sociales 'pre-modernas', que en muchos sentidos nos recuerdan a los actuales ('post-modernos') 'movimientos sociales'. Particularmente en lo referente en su resistencia 'al mercado', su desconfianza hacia el estado, y su idealización de 'lo local' (sub-nacional). En muchos casos, podríamos incluir también un cierto carácter 'mesiánico', en oposición a lo establecido, pero sin alternativas concretas. Opuesto a esto, proponemos el concepto de 'rebeldes institucionalizados', que en nuestra opinión, refleja el camino de movimientos sociales hacia una mayor 'armonía' con el estado. Esto se da, en el caso uruguayo, a partir de nuevo gobierno

frenteampartista que asume al poder el 1 marzo del 2005. Pero antes de esto comenzaremos por hacer un breve racconto de la historia de este conflicto.

III. ANTECEDENTES DEL CONFLICTO INTERNACIONAL

Durante el año 2002, la empresa española ENCE presentó al gobierno uruguayo el proyecto para instalar una planta de pasta de celulosa en Fray Bentos, con una inversión de 600 millones de dólares. Hacia el mes de marzo de 2003, otro interesado, la empresa finlandesa Metsä-Botnia (a partir de aquí, solo Botnia) adquirió el 60 por ciento de la empresa uruguaya Forestal Oriental S.A. (FOSA). La inversión de Botnia no solo sería uno de los principales emprendimientos forestales en Uruguay, sino quizás el mayor proyecto de inversión extranjera en la historia del país. El 4 de octubre de 2003 se realiza el primer bloqueo del puente Gral. San Martín, por parte de 'los vecinos' de Gualaguaychú. El 19 de octubre el gobierno del presidente uruguayo, Jorge Batlle (2000-2005), autoriza la instalación de ENCE en Fray Bentos. La Cancillería argentina responde (el 27 de octubre) con una queja por escrito considerando que el proyecto fue autorizado unilateralmente por Uruguay, sin consulta previa a la Argentina¹ lo que sería un acto contrario al Estatuto del Río Uruguay².

Siguiendo una búsqueda de solución bilateral, una de las instancias donde se intentaba dirimir el conflicto fue la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), donde no se avanzaba dadas las distintas interpretaciones sobre los acuerdos binacionales en torno al río Uruguay. Ante el estancamiento de estas negociaciones y la decisión de presidente Vázquez de continuar la construcción de la fábrica, hay un fuerte crecimiento de la movilización popular, con manifestaciones masivas. Nuevamente se insiste en la dimensión bilateral, donde los presidentes Kirchner y Vázquez, acuerdan en crear una Comisión Binacional para analizar el impacto ambiental. Pero tampoco hay aquí ningún acuerdo con lo cual se produce un nuevo aumento de la movilización en el lado argentino. Como bien dice Pakkasvirta, la "bola de nieve transformada en una crisis empezó a rodar" (2010:168). Lo que al principio era un pequeño grupo local consiguió juntar masas, sin vinculación con los partidos establecidos lo que también genera inquietud en el sistema. En el año 2006 hay otra gran manifestación en Gualaguaychú, con participación en la manifestación del vicegobernador de la provincia de Entre Ríos, Guillermo Guastavino (*Clarín.com* 2006b). En otras manifestaciones también participaría el mismo gobernador Jorge Busti y, posteriormente incluso el propio presidente de la República Argentina, Néstor Kirchner (2003-2007), del Partido Justicialista. Como plantea Pakkasvirta (2010:169), "apoyado en el conflicto el Peronismo ganó capital político en Entre Ríos", donde tanto

el nuevo Intendente de Gualeguaychú y el Gobernador de Entre Ríos, peronistas, se consolidan en el poder.

A comienzo del 2005, el nuevo gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vázquez (2005-2010), del Frente Amplio, autoriza la construcción de la planta finlandesa Botnia en Fray Bentos. Desconforme con esto, en junio, Argentina envía una carta al Banco Mundial en la que expresa su 'preocupación' ante la Corporación Financiera Internacional (CFI), organismo³, clave para la financiación de las plantas. En diciembre la CFI divulga un estudio preliminar de impacto social y ambiental del proyecto de Botnia, en el que señala que no prevé efectos negativos para la Argentina. La Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú responde con la reanudación del bloqueo al puente hacia Fray Bentos en enero de 2006, sumándose esta vez los vecinos de los otros dos pasos fronterizos (de las ciudades argentinas de Colón y Concordia). El 11 de marzo de 2006, los presidentes de Argentina y de Uruguay se reúnen en Chile y acuerdan realizar dos encuentros para negociar una salida a la controversia. Esto no prospera, continuando los bloqueos de rutas al igual que la actividad de Botnia en Fray Bentos. Ante la imposibilidad de destrabar el conflicto en el terreno bilateral, se incorporan nuevos actores. Entre estos están el ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, el ombudsman de la CFI (Banco Mundial). Tampoco se encuentra una solución por esta vía con lo cual en mayo del 2006, se introducen nuevos actores en el conflicto, El gobierno argentino demanda a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya (Holanda) por violación del Estatuto del Río Uruguay ante lo cual el gobierno uruguayo recurre al Tribunal Arbitral del Mercosur (TAM); para que decida si Argentina violó los acuerdos de libre circulación de este organismo al permitir el bloqueo de pasos. Por el lado de la CIJ, en julio del mismo año, rechaza la petición argentina para que Uruguay suspenda la construcción de la planta hasta que se produzca un pronunciamiento de la Corte. El Tribunal Arbitral del Mercosur, por su lado, cuestiona los bloqueos de puentes, pero en forma muy limitada. El TAM aceptó que el Estado Argentino debía tomar medidas que garantizan la libre circulación en caso de futuros cortes, pero entendió que no correspondía indicar medidas a adoptar. Por ende, "no definió sanciones, ni impuso medidas correctivas" (INTAL 2009:126).

El 4 de noviembre de 2006 durante la Cumbre Iberoamericana en Montevideo, el presidente argentino, Néstor Kirchner, pide al rey de España que medie en el conflicto. Este acepta ejercer de 'facilitador', pero siguen los cortes de ruta y Uruguay presenta un pedido de medida cautelar ante la CIJ, que responde en enero del 2007, rechazando el reclamo

Uruguayo. En febrero de 2007 el ministro español de Asuntos Exteriores anuncia que Argentina y Uruguay han llegado a un “entendimiento para iniciar un diálogo directo” con el apoyo de España para abordar los problemas creados por la instalación de plantas de celulosa en la frontera. Sin embargo, el 9 de marzo de 2007 el Poder Legislativo de Entre Ríos aprueba una ley que prohíbe la exportación de madera a Uruguay, una iniciativa impulsada por los habitantes de esa provincia argentina que se oponen a la construcción de una papelería en el país vecino. El 29 de abril más de 100 mil personas marchan, en Gualeguaychú, bajo el lema “Honrar la Vida, No a las Papeleas sí a la Vida”.

IV. LOS 'REBELDES' EN ACCIÓN

Antes que el conflicto se manifestara a nivel internacional, entre los gobiernos de ambos países, había presiones internas (a nivel nacional) producidas por el accionar de la ‘sociedad civil’. En el calor de este conflicto ha quedado de lado el hecho de que la preocupación entorno a las plantas de celulosa no era solo un tema del lado argentino del Río Uruguay. Como describen Comini y Pontiroli (2006), los antecedentes directos a la instalación de las empresas productoras de celulosa en el Departamento de Río Negro pueden situarse a partir del año 1987, con la aprobación (en Uruguay) de la Ley de Promoción Forestal 15.939. A partir de aquí el sector forestal comenzó a desarrollarse fuertemente en el país, lo que motivó un debate con sectores preocupados por las consecuencias medioambientales. Este debate continuó durante los noventa dando lugar a, según Zibechi (2005), la formación de organizaciones como Movimiento por la Vida, el Trabajo y un Desarrollo Sustentable. Este tenía arraigo en la ciudad de Fray Bentos y sus principales dirigentes eran militantes de ‘la izquierda’. Hay incluso quienes mantienen, como Irigoyen (2006), que “la oposición a las plantas de celulosa es obra de militantes del FA y que el movimiento se originó en Fray Bentos y se radicalizó al conocerse los proyectos de ENCE primero y Botnia después”. Según este, la campaña contraria a las plantas comienza del lado uruguayo (donde estas serían ubicadas), generando también temor en Gualeguaychú. Parece difícil afirmar donde comenzó ‘la campaña’. Lo que se sí parecería es que este movimiento tiene raíces en la discusión protagonizada por un movimiento transnacional (argentino, uruguayo) contrario a la políticas de forestación y otros temas medioambientales. Varios elementos en los planteos hechos por este movimiento se mantienen en las nuevas movilizaciones, al hacerse inminentes la inversión en la producción de celulosa. Vale decir, una mezcla de lo que denominaremos planteos: ‘ecologistas’, ‘nacionalistas’ y ‘mercado-escépticos’ (ante empresas privadas, multinacionales e inversores

extranjeros)⁴. Tres elementos que se conjugan en la crítica a lo que se llama un 'modelo de desarrollo dominante' y que vemos como una base ideológica detrás de la oposición al establecimiento de las fábricas de celulosa. Continúa también vigente la transnacionalidad al momento de lanzarse (previo al primer bloqueo del puente Gral. San Martín en septiembre de 2003) la "Declaración de Gualeguaychú de Vecinos y Entidades Auto Convocados", donde "los vecinos e instituciones argentinas y uruguayas, auto convocados en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, República Argentina" manifiestan que;

...como consecuencia de importantes debates y encuentros públicos llevados a cabo a ambas márgenes de la costa del Uruguay, se ratifica la más absoluta oposición a la instalación de una planta de celulosa de origen español y de del denominado grupo empresario ENCE, a emplazarse en M'Bopicuá a 8 kilómetros al norte de la vecina ciudad de Fray Bentos, República Oriental del Uruguay" (*Cronista Digital* 2003).

Está claro que cuando se refieren a "importantes debates" no solo se trata de Argentina, sino también a Uruguay. Sin duda, en su etapa inicial el movimiento contra las plantas tuvo un punto fuerte en Uruguay, donde había varias organizaciones trabajando desde fines de los ochenta, e torno a la dimensión de la nueva política de forestación. Por cierto, que esto también existía en Argentina, lo que es particularmente interesante en el caso de Uruguay es que no era solo una posición de grupos ecologistas o vecinos preocupados. Hay motivos para pensar que en Uruguay, antes que en Argentina, el reclamo fue tomado por partidos políticos con alta relevancia nacional. Esto se manifestó claramente en el año 2002, en torno a la discusión parlamentaria sobre el "Acuerdo Relativo a la Promoción y Protección de Inversiones" entre Finlandia y Uruguay, que fue finalmente aprobado por el Senado de la República en octubre del 2003.⁵ Tanto 'vecinos' de Fray Bentos como ONGs medioambientalistas manifestaban públicamente su 'profunda consternación y alarma' por la decisión del Parlamento uruguayo acerca de un acuerdo de inversiones con Finlandia (*espectador.com* 2004a). Acuerdo que, como ya se sabía, era un paso indispensable para las inversiones posteriores en el área de la celulosa. En ese momento, la bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA)⁶ votó en contra. Así argumentaba el diputado del Partido Socialista, Ricardo Castromán, la posición negativa de su bloque:

...creo que esto le va a traer muchos más dolores de cabeza al Estado uruguayo, cualquiera sea la conducción política que a partir de octubre tome los destinos del país....se habla de que si se concreta la construcción de la planta de celulosa por parte de Botnia, que pertenece al Estado finlandés, esa va a ser tierra finlandesa donde nadie va a tocar nada ni revisar nada. Acá hay legislación en la materia, aunque poca, y estamos trabajando intensamente en procura de que la

ciudadanía se exprese políticamente y nos dé oportunidad este país, para tratar de salvaguardar el medio ambiente, que se cumplan y se apliquen las mismas normas que se aplican en Europa en este tipo de inversiones y fundamentalmente en este tipo de fábricas de celulosa, que son altamente contaminantes (*espectador.com* 2004).

Vale notar la coincidencia en fechas entre la posición frenteamplista en el Parlamento y la ‘Declaración de Gualaguaychú’ (ver arriba). Pero más importante es ver la similitud en la argumentación. Más allá que se dijera que el FA no estaba en contra de las plantas en sí, los argumentos contrarios al acuerdo con Finlandia son también usados por los movimientos sociales en ambos lados del río. Al igual que en la Declaración, Castromán hace una crítica hacia lo que considera el ‘modelo de desarrollo dominante’, buscando proteger los ‘intereses nacionales’ frente a ‘intereses de inversores extranjeros’. Según Castromán, el objetivo es defender la preservación de “un río que es la vida de todo ser vivo”. Expresando un rechazo a buscar fuentes laborales “a cualquier precio, aunque lo precisamos urgentemente”, y criticando la existencia de “normas que habilitan la inversión extranjera, que la protegen, que la liberan de aportes tributarios...”. Algo que, en su opinión, iría a cambiar si su partido llegara al gobierno. Esta línea de argumentación refleja de alguna manera la que ya se daba en torno al tema ‘forestación’, donde los elementos ‘ecologista’ (consecuencias medioambientales de la forestación), ‘mercado-escéptico’ (hacia inversión privada) y el ‘nacionalista’ (particular escepticismo a inversión extranjera). Todo esto ligado a la oposición al ‘modelo de desarrollo dominante’.

Dentro del FA, había distintas posturas, donde, hasta asumir el gobierno, parecería dominar la negativa, ante la de (con las palabras de Botinelli) ‘prudente apoyo’ (*espectador.com* 2006). Lo mismo dentro del movimiento social más poderoso e influyente del Uruguay; el movimiento sindical representado por la central sindical única, el PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores). Como señala Botinelli:

Fue tomando cuerpo por un lado en la militancia de la izquierda en la zona de influencia, en Fray Bentos y más aún en Mercedes, y también en Montevideo, una fuerte oposición a las plantas, con una actitud muy activa, muy militante, y a nivel sindical fue produciéndose un giro desde una posición más contemplativa a una más opositora que llevó al congreso del PIT-CNT a un pronunciamiento contrario a las plantas (*espectador.com* 2006).

El pronunciamiento al cual se refiere, se da en el octavo congreso del PIT-CNT (septiembre del 2003) que, en su resolución No. 14, declara que: “El Octavo Congreso del PIT-CNT respalda la decisión adoptada por los Plenarios Sindicales Departamentales de Soriano y Río Negro, contraria a

la instalación de las plantas de celulosa”, moción aprobada por amplia mayoría (*espectador.com* 2005). Esto iba al unísono con la postura de los comités Frente Amplio en esos Departamentos (lindantes al Río Uruguay) y, aunque más ambivalente, a nivel nacional. Por ejemplo, como explica Irigoyen (2006), al inaugurarse el puerto de M'Bopicuá, estaba presente la plana mayor de la dirigencia política nacional (Presidente de la República y otros altos dirigentes políticos), pero fue ninguna figura nacional del FA (Tabaré Vázquez había sido invitado) ni departamental del FA.

V. LOS 'REBELDES' INSTITUCIONALIZADOS

A pocos tiempo de instalado el nuevo gobierno, Botnia comienza (en abril del 2005) la construcción de la planta, y la línea frenteamplista se torna favorable de la posición de 'apoyo prudente'. Aquí comienza a gestarse una división abierta entre la postura negativa, mantenida por distintos actores sociales, y la del (ahora) partido de gobierno. Esto fue expresado por el Secretario General del PIT-CNT, Juan Castillo, quien se manifestaba sorprendido de que (a raíz del visto bueno, por parte del nuevo gobierno, a la construcción de la fábrica en Fray Bentos), “tan rápidamente se haya dilucidado un tema que al menos a los pobladores de la región preocupa y creo que como al conjunto de los uruguayos – no tengo por qué decirlo – también debería preocupar al gobierno electo” (*espectador.com* 2005).

Otra expresión de esta división se da en mayo del 2005, en una concentración contra la instalación de las plantas de celulosa donde uno de los oradores principales era el conocido escritor (frenteamplista), Eduardo Galeano. No era una presencia intrascendente, dado la influencia y representatividad que este ha tenido en gran parte de la colectividad política uruguaya (y latinoamericana). La retórica de Galeano (*Mirando al Sur* 2007) fue, sin duda, coherente con el planteo que se había mantenido hasta entonces y que también fue el sustento ideológico detrás de la oposición al acuerdo con Finlandia. Galeano hace un planteo 'ecologista', reclamando “la necesidad de que antes de tomar una decisión que nos parece grave y que puede implicar el envenenamiento del río...que no es de ninguna manera obra de la imaginación sino que es la enseñanza triste que han dejado las fábricas de celulosa por la experiencia ya realizada en tierras vecinas sobre todo, en Chile, en Argentina”. Hace también un planteo, 'mercado-escéptico'⁷, contrario a aceptar la inversión extranjera por responder a las necesidades del mercado. Esto va mezclado con argumentos de tipo 'nacionalistas', al preguntar:

¿Y ese Sr. Mercado es uruguayo? ¿Tiene Credencial Cívica? ¿Votó? ¿Fue votado? ¿Quién votó por el Sr. Mercado? El Frente Amplio no tiene que rendir cuentas al Sr. Mercado pero si está obligado a rendir cuentas al pueblo que lo votó (*Mirando al Sur* 2007).

Es justamente en ese último punto donde comienza a divergir la línea del partido (ahora) de gobierno con la de Galeano y los grupos contrarios a la instalación de las fábricas. La pregunta es, a la hora de ‘rendir cuentas’ (como dice Galeano): ¿Qué le exigirá el pueblo uruguayo al partido de gobierno? ¿Será el mantenimiento de altos estándares ecológicos de acuerdo a la misma definición que Galeano sobre la ‘dignidad como obligación principal’? ¿O resultados concretos en creación de fuentes de trabajo (particularmente en zonas de alta desocupación como Fray Bentos) y disminución de la pobreza? En la lógica del gobierno, la inversión en el sector celulosa está enmarcada en la generación de un clima macroeconómico que asegure inversión extranjera, elemento imprescindible (según el gobierno) para lograr crecimiento sostenido. Pero esto no se busca como fin en sí mismo, sino con relación a elementos centrales de la política económica: bajar la desocupación, disminuir pobreza y aumentar la equidad. Con las palabras del propio gobierno, buscando integrar al ‘Uruguay Productivo’ con el ‘Uruguay Social’ (*Ministerio de Economía* 2007). Con respecto a al tema de ‘las papeleras’ está claro que el apoyo popular ha ido en ascenso desde fines del 2002, y aumentó aún más entre el año 2004 y 2005. Posiblemente, según Botinelli (*espectador.com* 2006), por “el fuerte apoyo de la izquierda, que era donde aparecían niveles más críticos a las plantas de celulosa”.⁸

Si bien la postura del gobierno puede haber significado sorpresa para los opositores a la producción de celulosa, el cambio en el lineamiento de la cúpula frenteamplista no fue un hecho repentino. La posición tendiente a insertar a Uruguay en el mundo, adaptando el país al sistema de mercado y no rompiendo con él, ha sido parte de un largo proceso de debate interno. Esto está bien explicado por Adolfo Garcé y Jaime Yaffé (2004) en su estudio de los cambios programáticos en la interna frenteamplista desde el año 1971 en adelante. Si bien el FA (como bloque), nunca planteó buscar alternativas al sistema democrático representativo (cosa que sí hicieron partidos miembros de la coalición), se planteaba el buscar un nuevo orden económico, no-capitalista. En este sentido, como dicen Garcé y Yaffé (2004:117) hubo durante los años noventa, un “reciclaje ideológico” de una postura ‘revolucionaria’ a un planteo más bien ‘reformista’ (‘progresista’). Esto es un tema central a la hora de estudiar el proceso de ‘institucionalización’ de este partido político y su efecto en ‘arrastrar’ con sí a los movimientos sociales. Un problema en este sentido, es que la

discusión ideológica que se da en la interna frenteamplista no parece haber sido ampliada a los distintos movimientos sociales relacionados a 'la izquierda'. No extraña entonces que surjan distintas interpretaciones de cómo llevar adelante 'los cambios', entre la dirección partidaria (ahora desde el estado) y distintos movimientos sociales.⁹ Esto explica la 'sorpresa' de Castillo, quien preguntaba:

¿Qué ha pasado, qué ha cambiado? Quisiéramos saberlo. Por lo menos creo que tenemos el derecho a estar informados de qué es lo que está sucediendo en ésta y otras decisiones para que se haya dado un cambio político tan radical en el FA (*espectador.com* 2005).

Sin embargo, más del desfase (que argumentamos es ideológico) entre el movimiento sindical el gobierno, en el caso de 'las papeleras' hubo una clara alineación al último. Al parecer, dentro del movimiento sindical, en torno al tema 'papeleras', no han prendido los argumentos expuestos por Galeano (ver arriba), representativo de los otros movimientos sociales que seguían contrarios a las fábricas. Por el contrario, en el PIT-CNT, según Botinelli (2006) "la polémica desapareció ante la asunción de una actitud francamente decidida del gobierno embarcado en la defensa de la inversión extranjera en general y de las plantas en particular, de las plantea como inversión extranjera y como emprendimiento". Los sectores sindicales que llevaron adelante la postura del octavo congreso (gremios de funcionarios públicos), tuvieron que ceder ante la postura de "gremios más vinculados con la generación de trabajo por parte de las plantas o su construcción, como el Sindicato Único de la Construcción y Afines (Sunca)". Últimamente, este cambio parece haberse consolidado y la central sindical ha apoyado claramente la construcción de las fábricas y se ha opuesto públicamente a los bloqueos de los puentes, incluso enfrentándose al movimiento sindical argentino, desde donde había señales de apoyo a los bloqueos de puentes (ver *La República* 2007 y *espectador.com* 2007).

He aquí una de las grandes diferencias con la Argentina con respecto a la matriz estado-sociedad. Uruguay tiene una central sindical única, con una dirección históricamente ligada a los partidos miembros del FA. No es de extrañar entonces que la institucionalización del partido ligado al movimiento sindical y a organizaciones medioambientalistas, 'arrastre' también a gran parte del 'movimiento' en la línea expresada por Foweraker (ver arriba). En el caso uruguayo, el papel directriz de los movimientos sociales lo mantiene el partido, que ahora está en la dirección del Estado. No hay espacio aquí para ver con profundidad las razones de esto, simplemente nos contentamos con marcar la importancia del elemento 'confianza' como base de un aumento de la legitimidad ante distintos sectores populares. Esta confianza se transluce en un apoyo a la línea

gubernamental (y al Estado) que promete defensa de intereses nacionales y disminución de la pobreza. No es que desaparezca la ‘desconfianza’ a las empresas extranjeras y los efectos medioambientales, pero aumenta la ‘confianza’ de los representantes nacionales, entorno a objetivos ‘superiores’: justicia social y desarrollo. Tampoco han desaparecido las voces discordantes, como la de Galeano y distintas ONGs, pero sin duda han quedado aisladas.

Se da aquí una suerte de enroqué, en el cual los argumentos anteriores, sostenidos en contra del acuerdo de inversiones con Finlandia, toman mayor fuerza en el lado Argentino. En este país, el movimiento social toma más las características que se le asignan a los llamados ‘nuevos movimientos sociales’, donde predomina una línea escéptica (cuando no contraria) a la vinculación con partidos políticos. Hay también un abierto rechazo a aceptar al Estado (y la ley) como intermediador. Incluso para dirimir conflictos internos con grupos ciudadanos del propio país, contrarios a los bloqueos de rutas (*La Nación.com* 2007a y *Clarín.com* 2006). La realidad en Argentina, era que el país todavía estaba sufriendo las consecuencias del colapso económico e institucional del año 2001. Una de las consecuencias sociales fue la desarticulación entre estado, partidos políticos y movimientos sociales. Esto no era solo producto de la crisis, sino que también de las políticas neo-liberales aplicadas desde el gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999). Por esto, el momento de estallar la crisis por las pasteras, el debilitado sistema político argentino seguía confrontando una generalizada desconfianza. En este contexto, el partido Justicialista, dirigido por Kirchner estaba en pleno proceso de rearticulación de sus lazos con el movimiento obrero incluyendo nuevos sectores como ser las organizaciones llamadas piqueteras (Camou 2008:149).

En el caso argentino no solo nos encontramos con una difícil relación con estado y partidos, sino que también una situación de confrontación entre los mismos movimientos sociales, cada uno con aspiraciones ‘superiores’, difíciles de cuestionar desde el punto de vista de ‘lo justo’. Si todo esto se diera solo dentro del ámbito nacional, quizás la línea de decisiones podría ser más clara, pero al ser un conflicto internacional el tema se complica aún más.

La razón es que se le agrega la variable ‘nacionalista’ como parte de la discordia entre uruguayos y argentinos, que pasa a ser utilizado de distintas maneras por los actores. Para ‘los argentinos’ (vecinos de Gualeguaychú, movimiento sindical, gobierno provincial y nacional), la defensa de la integridad (‘lo nacional’), es resistirse al ‘dominio de las multinacionales’ que buscan ‘empeorar’ la calidad de vida en el ‘tercer

mundo'. Para 'los uruguayos' (vecinos de Fray Bentos, movimiento sindical, gobierno departamental y Nacional), tanto la aceptación de la inversión extranjera, como la implicancia de eventuales problemas medioambientales (por ejemplo, el mal olor proveniente de la fábrica) pasó a encuadrarse en la confianza a un proyecto nacional encabezado por el nuevo gobierno del Frente Amplio. Su objetivo era defender los intereses nacionales que se formulaban en términos de eliminación de la desocupación, un país productivo (desarrollo) y disminución de la pobreza.

Se podría decir que del lado uruguayo la 'confianza' en el estado y el sistema político se refuerza con el gobierno frenteamplista. Esto se puede ver también en la credibilidad que reciben los repetidos informes (de autoridades nacionales y extranjeras) que contradicen el supuesto efecto contaminador de las fábricas. Es en este sentido que se produce lo que aquí llamamos la 'institucionalización de los rebeldes', que en el caso más concreto de la población de Fray Bentos fue se estimulaba por las ventajas que se le prometían a la población local, en el marco del 'proyecto país' que impulsa el gobierno. ¿Quizás los vecinos de Gualeguaychú hubieran sido más positivos a entenderse con sus pares de Fray Bentos, si las 'virtudes' de la inversión no se delimitaran por una frontera política? ¿Quién les compensara a ellos las eventuales pérdidas que este proyecto implica? El temor es aquí es real, y legítimo.

VI. EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO, CONTEXTO ACTUAL Y CONSECUENCIAS

Ante el fracaso de todas las instancias, continúa tanto el bloqueo de los puentes como la producción de Botnia. Es recién en abril del año 2010, con el pronunciamiento de la CIJ, que comienza a destrabarse el conflicto. Se reconoce aquí que Uruguay violó el tratado del río, pero se considera también que la planta puede seguir operando porque no hay pruebas de que contamine. El veredicto de la CIJ va de la mano de una nueva constelación presidencia, con Cristina Fernández (2007-) en Argentina y José Mujica (2010-2015) en Uruguay. Al mismo tiempo, comienzan a haber resquebrajamiento en el frente argentino donde se organizan juntadas de firmas para pedir la apertura del puente entre Gualeguaychú y Fray Bentos. Incluso en la misma ciudad de Gualeguaychú, un grupo de vecinos presenta una demanda penal contra los ambientalistas por lo que consideran es un "bloqueo ilegal". En junio del 2010, finalmente, el estado argentino marca posición ante los medioambientalistas, al ser conformado por la justicia que se debe garantizarse el libre tránsito en el puente internacional bloqueado. El Gobierno argentino presenta en junio una denuncia penal y otra civil contra los asambleístas por el bloqueo del puente con lo cual se terminan levantando los cortes y se comienza una nueva etapa.

Pero el conflicto no ha desaparecido, sigue latente. La pregunta es si será, como ha dicho Gudynas (2007:9), 'endémico'. No ha desaparecido la resistencia a inversiones que pongan en riesgo al medioambiente, donde incluso, la posición más radical. Ciertamente no lo han hecho en Argentina, pero tampoco en Uruguay, donde en el último tiempo se ha generado un nuevo movimiento social en contra de la llamada 'mega-minería'. En este caso tratándose de un tema nacional uruguayo, sin la variable limítrofe internacional que es la caracteriza a varios de los conflictos medioambientales más recientes. En este sentido se podría afirmar que "el conflicto entorno a la planta de Botnia es el símbolo de una fracasada cooperación fronteriza" (Pakkasvirta 2010:103). Una pregunta legítima es como evitar que movimientos locales puedan dictar toda la política exterior de un país.

Avanzando algunas respuestas al respecto, se podría decir que un primer elemento a tener en cuenta que los conflictos medioambientales tienen algunas características particulares. Una de ellas está en su posible dimensión internacional. Desde los años noventa con la creciente liberalización de mercados y demanda de *commodities*, esto va de la mano de una mayor explotación de recursos naturales al mismo tiempo que se produce una erosión del estado-nación como agente estructurador y controlador del territorio. Gudynas (2007:10) ve esto como una 'deterritorialización', donde se protege la vinculación de 'enclaves' o 'nodos' a la economía global. Este es un argumento que recuerda a lo que el geógrafo David Harvey llamara, la 'geopolítica del capitalismo' (1985). En este sentido, temas como la plantación de árboles, el uso de recursos acuáticos, la bioenergía, o la celulosa están conectados (Kröger 2012). Las posibilidades y los problemas que esto plantea ya no es solo cuestión 'de estados', sino 'entre estados'.

Otro elemento es tomar en cuenta las particularidades específicas en cada caso y las características propias de los actores involucrados en determinado momento. En lo que respecta al conflicto uruguayo-argentino, hay dos elementos que deben ser tomados en cuenta, a modo de explorar más en profundidad las divergencias. En primer lugar el cambio de gobierno en Uruguay, donde distintos movimientos sociales adhieren a una plataforma, ahora dirigida desde el estado, como (en realidad, todavía intento de) 'proyecto nacional'. El segundo lugar, los cambios que ha vivido la República Argentina, desde la crisis del 2001. Tanto el primero, como el segundo elemento, están relacionados al tema 'confianza'. En el caso uruguayo se supera su crisis económica (también del 2001) con un sistema político estructurado, actuando con 'espíritu nacional' en momentos claves. A pesar de la gravedad de la crisis se mantiene en el

poder el partido de gobierno y se produce una transición a la oposición (el EP-FA), que da legitimidad al sistema. En Argentina, por el contrario, la crisis provoca una fuerte erosión institucional con cuatro presidentes ocupando el cargo en un período de 18 meses. La popular consigna de 'que se vayan todos', marca de alguna manera la profunda pérdida de legitimidad en los representantes políticos, así como la dificultad para encontrar un consenso nacional entorno a un nuevo modelo de desarrollo. Por lo tanto, mientras que en Uruguay los movimientos sociales de importancia van confluyendo con el Estado a través de un partido, en Argentina, se ve una realidad más 'defragmentada' donde se carece de nodos de confluencia. Sin duda, los cortes de ruta podrían ser vistos como "un efecto de la crisis de representatividad y gobernabilidad que sufre la Argentina" (*La Nación* 2007b). Esto explicaría la dificultad para encontrar una instancia ante la cual se puedan sacrificar beneficios particulares, en torno a un 'bien común'. Para ser claros, el fenómeno del 'piquete', de tomar la 'ley en propias manos', del 'escrache', de 'medidas de fuerza' (incluso con muertos), se había transformado en algo recurrente en la sociedad Argentina. El bloqueo de los puentes toma trascendencia porque era un conflicto internacional, sino podría ser uno más de los tantos conflictos de ese tipo que se dan en Argentina durante este período (*La Nacion.com* 2006).

Un tercer elemento está en el análisis de cómo se rellenan los vacíos provocados por el reordenamiento productivo y la 'deterritorialización'. Tomando como partida el caso analizado en este trabajo. Aunque en Uruguay se haya llegado al gobierno una fuerza que genera confianza suficiente a modo de 'institucionalizar' la protesta de los movimientos 'rebeldes', no es inmune a la resistencia que puede encontrar por parte de decididos movimiento sociales en otro país. En casos de este tipo, el gobierno de frenteamplista no se enfrenta a empresas multinacionales o la banca internacional, sino a actores sociales parecidos a los que son su base de nacional de apoyo. La activa participación de los movimientos sociales, al igual que su acceso a nuevas técnicas de comunicación, son otras características de los nuevos formatos de conflictos medioambientales (Melián 2009). Esto es un desafío para gobiernos que se dicen populares y que tienen estrecha relación con muchas de estas organizaciones. Pero también significa un desafío para las políticas nacionales, cuando el movimiento de una pequeña ciudad puede bloquear la política internacional de un país, y rutas que conectan el comercio de toda una región.

La profundización de soluciones debería explorarse en el marco de la construcción, o la continuación, de construcción de un marco institucional regional. El ámbito en donde se pueden reterritorializar la presencia estatal

y buscar formatos de institucionalización de expresiones políticas de la sociedad civil. Hay quienes plantean que la integración regional debe “comenzar por impulsar las interacciones a través del crecimiento económico y no mediante el fomento de una identidad común, la creación de instituciones supranacionales o la unión de las políticas exteriores” (Malamud 213:280). Esto es un formato más liberal con dudosa eficiencia en conducir a un mayor grado de integración. Si la integración regional tiene como objetivo una mayor papel del estado como regulador al mismo tiempo que se profundiza la participación ciudadana, se deben explorar nuevos formatos de ‘ciudadanía’. Esto significa, por ejemplo, una nueva concepción nacional a modo de aglutinar fuerzas y disminuir resistencias internas; en el espacio territorial concebido por el marco regional/estatal.

En el caso del conflicto por las pasteras, si bien el nacionalismo logró el fin de cohesionar el apoyo a las posturas en ambos países, también significó sacrificar lo que, a nuestro modo de ver, es un camino para prevenir que este tipo de conflictos en el futuro: el regionalismo. Volvemos aquí al punto de Hochstetler y Jelin entorno a la pregunta sobre cómo crear esferas públicas supranacionales desarrollando nuevas formas de ciudadanía. Está claro que temas como el desarrollo, que tiene que ver con uso de aguas u otros recursos naturales comunes, no pueden ser concebidos dentro del marco de una frontera política. Acordamos con Gudynas (2006, p. 22) quién plantea que “cualquier estrategia de desarrollo nacional será fatalmente incompleta si no incorpora la dimensión regional e internacional. El contexto regional no puede ser considerado como un epifenómeno, o problemas de vecindario, que sirven para buscar ventajas comerciales o plantear barreras aislacionistas, sino que es un ingrediente esencial de cualquier cambio”. Es frecuente escuchar a los distintos actores, especialmente del lado uruguayo, manifestando quejas sobre la insuficiencia, fracaso y ausencia de las instituciones regionales para resolver este conflicto. Pero no es justo atribuirle todo esto al MERCOSUR, o a la ‘falta de liderazgo brasileño’, cuando ninguno de los proyectos de forestación o producción de celulosa fueron originalmente concebidos como emprendimientos regionales. Nos referimos a algo más amplio que usar los mecanismos de consulta establecidos por el Estatuto del Río Uruguay. Apuntamos a la evaluación regional de proyectos de desarrollo, como elemento indispensable para pensar a largo plazo. Esto no es una utopía, ya en la Unión Europea se están aplicando distintos mecanismos de políticas ‘micro-regionales’, a modo de crear nuevo tipo de sinergias locales (Söderbaum 2005).

VII. CONCLUSIÓN

Sean 'rebeldes' o 'institucionalizados', hay un gran desafío en la forma de armonizar grupos sociales, pertenecientes a distintas matrices de relacionamiento con el Estado y los partidos políticos. Está claro, en la concepción de futuros proyectos que consuman 'bienes comunes' con otras naciones, tanto el reparto de 'beneficios', como la responsabilidad por los riesgos, debe ser un tema compartido. Aunque un proceso así lleve más tiempo, el costo de no hacerlo puede ser alto. Las consecuencias para Uruguay de los bloqueos de puentes, son un buen ejemplo de ello.

Este conflicto deja claro que más allá de que los movimientos sociales puedan representar la causa justa de sus miembros, no dejan de representar perspectivas particulares que precisan de un marco institucional más amplio bajo el cual ser dirimidas. Pero esto no se trata solo de 'lo legal', sino de la necesidad de espacios representativos, con legitimidad, aceptada por los actores como la expresión de un 'bien común'. Más allá que estos elementos pueden ser generados a nivel nacional, esto no alcanza a modo de concebir proyectos de desarrollo de mayor envergadura. Sobre todo para los casos donde hay recursos naturales compartidos, y especialmente para el caso de pequeños países como Uruguay. Como bien advierte Touraine (2000:7), las soluciones minimalistas pueden asegurar coexistencia, pero no comunicación. Sin duda que la institucionalización de espacios estatales regionales (supranacionales) requiere tiempo y mucho esfuerzo. Pero, por otro lado: ¿cuantos conflictos como este puede aguantar la región y los procesos de desarrollos nacionales?

NOTAS

¹ Hay una cronología on-line sobre los eventos de la crisis en el diario argentino La Nación (ver *La Nacion.com* 2007)

² Tratado bilateral de 1975 que reglamenta la administración compartida de ese recurso.

³ Perteneciente al Banco Mundial.

⁴ Preferimos usar el término más leve de 'mercado-escéptico', más allá que en muchos de los casos (incluso en el Frente Amplio) había (y sigue habiendo) una postura directamente 'anti-capitalista'.

⁵ Remitido al Parlamento por el Poder Ejecutivo el 21 de marzo del 2002 y aprobado en el Senado el 15 de octubre del 2003.

⁶ Encuentro Progresista Frente Amplio, fue el acuerdo (técnico) electoral que núcleo distintos sectores entorno de la candidatura presidencial del frenteamplista Tabaré Vázquez. En adelante nos referiremos solo al Frente Amplio, que es el espacio político donde se encuentra la mayor ligazón con los movimientos sociales y que se convertirá en el real partido de gobierno a partir de marzo del 2005.

⁷ Eduardo Galeano es además conocido por su postura directamente 'anti-capitalista'.

⁸ En el mes de Diciembre del 2006, 62 por ciento de los uruguayos a nivel nacional apoyaba la instalación de las fábricas, 69 por ciento en la zona de influencia de un posible impacto medioambiental y 74 por ciento específicamente en la ciudad de Fray Bentos.

⁹ No hay que olvidar que el Frente Amplio sigue siendo una especie de híbrido entre partido político y coalición de partidos. Un estudio más profundo sobre el tema 'papeleras', debería estudiar más de cerca tanto el debate programático del Frente Amplio, así como el proceso de discusión dentro de los partidos miembros.

Referencias

- Camou, Antonio (2008), “¿Más allá del bipartidismo?: El Peronismo Kirchnerista como problema y solución en la Argentina actual”, *Stockholm Review of Latin American Studies*, Issue No. 3, December, pp. 143-153.
- Cardoso, Fernando Henrique (2006), *A arte da política: A história que vivi*. Civilização Brasileira: Rio de Janeiro.
- Clarín.com (2006), “Papeleras: Los vecinos de Colón desalojaron la ruta al Uruguay”. Publicado en 2006-04-19. Accesible en <http://www.clarin.com/diario/2006/04/19/elpais/p-00301.htm>. Fecha de descarga 2014-12-04
- Clarín.com (2006b). “Gualeguaychú: masiva marcha para rechazar las papeleras en Uruguay”, Publicado en 2006-04-30. Accesible en <http://edant.clarin.com/diario/2006/04/30/um/m-01187339.htm>. Fecha de descarga, 2014-23-04
- Comini, Nicolás y Pontiroli, Norberto (2006), “Pasteras y juegos políticos: Tensiones e incongruencias rioplatenses”. En *Temas del Cono Sur. Dossier de integración* 28, Septiembre. Una Publicación de MERCOSUR ABC, Argentina. Accesible en <http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=965&IdSeccion=3>. Fecha de descarga 2007-05-17.
- Cronista Digital (2003), “Declaración de Gualeguaychú de vecinos y entidades autoconvocados”. Gualeguaychú. Publicado el 2003-01-10. Fecha de descarga 2016-02-09.
- Espectador.com (2007). "Centrales sindicales promueven un protocolo ambiental en la región", *Perspectiva*, 2007-02-28. El Espectador. Accesible en <http://www.espectador.com/nota.php?idNota=90023>. Fecha de descarga, 2007-06-08.
- _____ (2006), “El conflicto argentino-uruguayo sobre las llamadas ‘papeleras’. La opinión pública y el sistema político”, *Perspectiva*, 2006-03-02. Radio Espectador. Accesible en <http://www.espectador.com/nota.php?idNota=61660>. Fecha de descarga, 2007-06-08.
- _____ (2005), “Castillo pide explicaciones por ‘cambio radical’ del FA”, *Perspectiva*, 2005-01-25. Accesible en <http://www.espectador.com/nota.php?idNota=35407>. Fecha de descarga, 2007-06-08.

- _____ (2004a), "Consternación y alarma por acuerdo que favorece planta de celulosa finlandesa", *Perspectiva*, Comunicado de Prensa de Grupo Guayubirá, 2004-05-05. Radio Espectador. Accesible en <http://www.espectador.com/nota.php?idNota=17475>. Fecha de descarga, 2007-05-17.
- _____ (2004), "Rige el acuerdo reclamado por Botnia para instalar una planta de celulosa", *Perspectiva*, entrevista a Diputados Ricardo Castromán (Partido Socialista, EP-FA) y Ruben Carminatti (Partido Colorado, lista 15), 2004-06-05. Radio Espectador. Accesible en <http://www.espectador.com/nota.php?idNota=17487>. Fecha de descarga, 2007-05-17.
- Foweraker, Joe (1995), *Theorizing Social Movements*. Pluto Press: London.
- Garcé, Adolfo y Yaffé, Jaime (2004), *La era progresista*. Editorial Fin de Siglo: Montevideo.
- Gudynas, Eduardo (2007), "Conflictos ambientales fronterizos", *Gestión Ambiental*, 13(1):1-19.
- _____ (2006), "América del Sur: Los fantasmas de la integración regional", *Revista del Sur* 166, Julio-Agosto, pp. 3-25.
- Harvey, David (1985), "The Geopolitics of Capitalism", en Derek Gregory and John Urry (eds) *Social Relations and Spatial Structures*. New York: St. Martins Press.
- INTAL (2009), *Informe MERCOSUR 13*, segundo semestre 2007 – primer semestre 2008, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Jelin, Elisabeth (ed.) (2003), *Más allá de la nación: Las escalas múltiples de los movimientos sociales*. Buenos Aires: Libros del Zorzal.
- Hobsbawn, Eric J. (1965), *Primitive rebels: Studies in archaic forms of social movements in the 19th and 20th centuries*. New York, London: W.W. Norton & Company.
- Hochstetler, Kathryn (2003). "MERCOSUR, ciudadanía y ambientalismo", En Elisabeth Jelin (ed.) *Más allá de la nación: Las escalas múltiples de los movimientos sociales*. Libros del Zorzal: Buenos Aires.
- Irigoyen, Eduardo (2006), "Papeleras y los conversos del Frente Amplio", *Indymedia Uruguay*, publicado 2006-01-26. Accesible en <http://archive.is/y3vhe> . Fecha de descarga, 2016-02-09.
- La Nación* (2007), "Cronología del conflicto", 2007-04-18. Accesible en http://www.lanacion.com.ar/archivo/Nota.asp?nota_id=901203, 2007-06-01.
- _____ (2007a), "Desalojaron el Corte de Colón: Una patota de desconocidos armados con machetes expulsó a los asambleístas", *Política*, 2007-01-06. Accesible en http://www.lanacion.com.ar/politica/nota.asp?nota_id=881186. Fecha de descarga, 2007-06-12.
- _____ (2007b), "López Murphy habló de 'descuidos'", *Política*, 2007-02-06. Accesible en http://www.lanacion.com.ar/politica/nota.asp?nota_id=881188. Fecha de descarga, 2007-06-08.

- _____ (2006), "Más sectores recurren a los piquetes", *Política*, 2006-12-05. Accesible en http://www.lanacion.com.ar/politica/nota.asp?nota_id=864888. Fecha de descarga, 2007-06-12.
- Kröger, Markus (2012), "Global Tree Plantation Expansion: A Review", *ICAS Review Paper Series* 3, pp. 1-24.
- La República* (2007), "PIT-CNT y la CGT suscriben un memorándum de entendimiento", 28 de febrero, Año 8, No 2475. Accesible en <http://www.lr21.com.uy/politica/247682-pit-cnt-y-la-cgt-suscriben-un-memorandum-de-entendimiento> . Fecha de descarga, 2016-02-09.
- _____ (2006), "Entrevista - Senador Eleuterio Fernandez Huidobro (Movimiento de Participación Popular)", *Diario La República*, 17 de Enero, Año 8. No 2074. Accesible en <http://lr21.com/politica/200208-huidobro-a-pagina-12-cuando-viene-una-inversion-uds-nos-cortan-lasrutas>. Fecha de descarga, 2016-02-09.
- Lembke, Magnus (2006), *In the Lands of Oligarchs: Ethno-Politics and the Struggle for Social Justice in the Indigenous-Peasant Movements of Guatemala and Ecuador*. Stockholm Studies in Politics. Department of Political Science, Stockholm University: Stockholm.
- Malamud, Andrés (2013), "El Mercosur: Misión cumplida", *Revista SAAP*, 7(2) noviembre, pp. 275-282.
- Melián, Virginia (2009), "New Media and Protest in Hybrid Societies", en Elisenda Ardevól y Antoni Roig (eds) *Researching Media through Practices: An Ethnographic Approach* [online dossier]. *Digithum* 11, pp. 26-30.
- Ministerio de Economía y Finanzas* (2007), "Estrategia de desarrollo productivo", documento accesible en la página web del ministerio. http://www.mef.gub.uy/documentos/pais_productivo.pdf. Fecha de descarga, 2007-06-01.
- Mirando al Sur* (2007), "Un discurso de Eduardo Galeano acerca de las papeleras", en *Concentración en Montevideo*, 2005-05-29. Accesible en <http://www.radiochango.com/francais/forums/La-Vela-Puerca/Galeano-y-las-papeleras.html>. Fecha de descarga, 2016-02-09 .
- Söderbaum, Fredrik (2005), "Exploring the Links between Micro-Regionalism and Macro-Regionalism", en Mary Farrel, Björn Hettne and Luk Van Langenhove (eds), *Global Politics of Regionalism: Theory and Practice*. London: Pluto Press.
- Touraine, Alain (2000), *Can we Live Together? Equality and Difference*. Cambridge: Polity Press.
- Zibechi, Raúl (2005), "Celulosa y forestación: Dos caras de un modelo depredador", en *Programa de las Américas del International Relations Center Article*. 2005-09. Accesible en <http://www.ircamericas.org/esp/726>. Fecha de descarga, 2016-02-09-05-14.